

### III. OTRAS DISPOSICIONES

#### MINISTERIO DEL INTERIOR

**6762** Orden INT/323/2025, de 27 de marzo, por la que se declaran de utilidad pública diversas asociaciones.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.

En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento durante los dos años anteriores a la solicitud.

En aplicación de esta normativa, y previa solicitud de las entidades interesadas, por la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación se han tramitado los respectivos expedientes conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

En dichos expedientes constan las memorias, justificaciones y demás documentos de obligatoria aportación por los interesados, así como los informes de los departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda.

Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en los procedimientos, se pone de manifiesto que las entidades solicitantes reúnen todos los requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.

En su virtud, y al amparo de las facultades previstas en el artículo 3.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, dispongo:

Primero.

Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:

Denominación	N.º Reg. Nal.
Provivienda.	95715
Yo No Renuncio.	611845
Sogolo.	620617
Asociación del Síndrome Asociado del SATB2-SAS.	617323
Asociación Humancoop Voluntarios para la Cooperación y el Desarrollo.	621350
Asociación Española de Síndrome de Wolf Hirschhorn.	595721
Asociación Española de Retinoblastoma-AER.	611804

Segundo.

Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas:

Denominación	CC. AA.	N.º Reg. CC. AA.
Asociación de Padres, Madres y Tutores o Tutoras de Personas con TEA-TGD (AOPA).	Andalucía.	10722
Caminando, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cantabria.	Cantabria.	4131
Asociación Andaluza de Familias Solidarias.	Andalucía.	10914
Asociación Todos Somos Iván.	Cantabria.	6491
Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas de Málaga-ASPAYM.	Andalucía.	8673
Asociación Benéfica Corazón Exprés.	Comunidad Valenciana.	53362
Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer.	Illes Balears.	9320
Associació Pa i Mel.	Illes Balears.	2947
ANOA Elx Asociación de Familias con Personas con Discapacidad Psíquica, Física y Enfermedades Raras de Elche.	Comunidad Valenciana.	8293
Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Extremadura.	Extremadura.	7074

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar, en ambos casos, a partir del día siguiente a su notificación, según establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 27 de marzo de 2025.—El Ministro del Interior, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.